

Condena mundial al documento argentino

La indagación internacional suscitada por el documento del gobierno argentino sobre los desaparecidos provocó un notorio clima de extrema gravedad en los medios militares y diplomáticos de Buenos Aires.

Las protestas de París, Madrid y sobre todo de Roma y del Vaticano, tuvieron repercusiones que sacudieron las estructuras del régimen a tal punto que primero la Junta Militar y luego los Generales del Ejército han tenido una serie de reuniones para examinar el grado de gravedad de la situación.

El documento explicativo constituye a juicio de los observadores un fracaso político que acentuó en forma sensible el aislamiento de los militares a medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de octubre.

Líderes políticos y sindicales, eclesiásticos y dirigentes de organizaciones humanitarias coincidieron en señalar que las explicaciones formuladas por el régimen sobre los métodos empleados en la lucha contra la guerrilla "representan todo salvo un punto final" o "el punto de partida de una nueva controversia" que constituirá, sin duda, uno de los temas centrales de la campaña electoral.

La actitud del gobierno italiano y las enérgicas declaraciones del presidente Sandro Pertini, más que las otras, tuvieron el efecto de un golpe de maza en los medios oficiales.

Aproximadamente el 50 por ciento de la población argentina es de origen italiano, y todo lo que proviene de la "vieja Italia" disfruta de un particular interés afectivo y sentimental en Buenos Aires.

El Gral. Reynaldo Bignone está sufriendo desde hace días fuertes presiones, sobre todo por parte de sectores militares, para que el gobierno llame "por tiempo indeterminado" a su embajador en Roma, Rodolfo Luchetta. "lo que da una idea del brusco aumento de la tensión entre ambos países", señalaron medios diplomáticos.

La reacción oficial de Buenos Aires, condenando la "injerencia extranjera en los asuntos internos de Argentina", no fue suficiente para disminuir el clima de tensión.

Tampoco tuvieron demasiado resultado las declaraciones del Gral. Bignone y del Almirante Ruben Franco, Jefe de la Marina y miembro de la Junta.

La indignación internacional, se destacó, constituye la "conse-

cuencia lógica" a las reacciones desencadenadas por el mismo documento en la opinión pública argentina.

"La Junta Militar publicó el documento y es todo lo que tiene que decir", indicó el Almirante Franco, mientras que para el presidente Bignone, "la protesta del presidente Pertini carece de total seriedad", declaraciones que sorprendieron a los medios diplomáticos y que van a suscitar otros comentarios.

Considerar como muertos a las personas que figuran en las listas, y no están detenidas ni en el exilio, y "colocarse por encima de la ley y la moral" remitiéndose sólo al juicio de Dios y la historia, es un signo de "totalitarismo inaceptable" y "hace temer lo peor" en vísperas de la era institucional que debe comenzar con las elecciones generales del 30 de octubre, se dice y se lee desde la semana pasada en la capital argentina.

Las protestas europeas no constituyen el único motivo de inquietud de los jefes militares argentinos.

Para la mayoría de las grandes figuras de los dos principales partidos políticos, peronistas y radicales, no pueden escapar a los

tribunales los autores de excesos, a pesar de la ley de amnistía que promulgará próximamente el gobierno del Gral. Reynaldo Bignone.

Algunos prometieron reclamar desde la primera sesión del futuro parlamento, surgido de las elecciones del 30 de octubre, la constitución de comisiones para investigar las verdaderas causas y la conducción de la guerra de las Malvinas, los desaparecidos, los métodos empleados en la lucha contra la guerrilla y, por último, la corrupción administrativa y las razones del aumento de la deuda externa durante los ocho años de régimen militar.

Esos tres polos de investigación son motivo de una polémica entre peronistas y radicales que amenaza con aumentar su agresividad.

Los dos principales líderes radicales, Raúl Alfonsín y Fernando De La Rúa, efectivamente acusaron a militares y sindicalistas peronistas de haber concluido un pacto para el período constitucional que debe comenzar a fines de enero de 1984.

Michel Henault
(Servicio AFP, Buenos Aires)